Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de tres (03) de abril de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **13323/INFOEM/IP/RR/2022**, interpuesto por **XXX XXX**, en lo sucesivo, la **RECURRENTE**; en contra de la respuesta de la **Secretaría de Educación**, en adelante, el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El **uno (01) de agosto de dos mil veintidós**, la particular presentó,a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00517/SE/IP/2022,** mediante la cual requirió lo siguiente:

*“Boleta de calificaciones del ciclo escolar 2017-2018, nivel Primaria, en el Estado de México. Clave de la escuela CCT 15PPR3296Z. O en su defecto el número de Folio de la boleta en mención.”* (Sic).

1. Se hace constar que la particular señaló como modalidad de entrega de la información: ***A través del SAIMEX.***
2. El **dos (02) de agosto de dos mil veintidós**, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se adjunta un archivo correspondiente al acuerdo de fecha 02 de agosto de dos mil veintidós signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, así mismo se anexan archivos con información remitida por el Servidor Público Habilitado.”* (Sic)

1. Se hace constar que el **SUJETO OBLIGADO** acompañó a su acuse de respuesta con el archivo electrónico cuyo título y contenido se narra a continuación:
   1. ***“RESPUESTA\_UT\_5170001.pdf”***: Documento de una foja consistente en el oficio número 21000007010000S/01173/UT/2022, de dos (02) de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la entonces **SOLICITANTE**, por el que informa que las boletas de calificaciones contienen datos personales, por lo que sólo se pueden entregar, de forma personal, en la escuela correspondiente; o bien, que podría realizar una consulta en el Sistema de Información y Gestión Educativa.
2. El **quince (15) de agosto de dos mil veintidós**, la particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** mediante el recurso de revisión **13323/INFOEM/IP/RR/2022**; impugnación en la que refirió lo siguiente:

* **Acto impugnado:** “*Solicitud de de boleta de calificaciones del ciclo escolar 2017-2018”* (Sic).
* **Razones o motivos de inconformidad:** *“En la respuesta me solicitan acudir a la escuela de mi hija, siendo que ya se acudió a la misma pero se obtuvo respuesta negativa (me comentaron que ya no cuentan con registro de la boleta solicitada) y me están exigiendo en su nueva escuela dicha boleta de calificaciones, de lo contrario no pueden elaborar su Cardex y posteriormente no podré inscribirla a nivel Secundaria, les agradezco infinitamente que me pudieran apoyar con la obtención de su boleta. Soy la madre de la afectada de nombre* [P. N. L. M] *(CURP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx), mi nombre es* [S. M. O] *(CURP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Agradezco de Antemano su apoyo y respuesta. P.D. Agrego documentación que comprueba el parentesco.”* (Sic).

1. Adjunto al recurso de revisión, la ahora **RECURRENTE** presentó una carpeta comprimida titulada ***“Doctos.zip”***, la cual contiene los siguientes archivos electrónicos:
   1. ***“IFE SANDRA.pdf”***: Documento de una foja consistente en la copia fotostática de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de la **RECURRENTE**.
   2. ***“ACTA NAC. CONYUGE.pdf”***: Documento de una foja consistente en la copia fotostática del acta de nacimiento de la **RECURRENTE**.
   3. ***“ACTA NAC. HIJA.pdf”***: Documento una foja consistente en la copia fotostática del acta de nacimiento de la hija de la **RECURRENTE**, de iniciales *P. N. L. M*.
2. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, con el objeto de su análisis.
3. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a través del acuerdo de admisión de **veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico, vía SAIMEX,a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el informe justificado procedente.
4. El **veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós**, el **SUJETO OBLIGADO** presentó, en vía de informe justificado, el archivo electrónico cuyo contenido se resume en las siguientes líneas:
   1. ***“INFORME JUSTIFICADO\_5170001.pdf”***: Documento de tres fojas consistente en el oficio número 21000007010000S/1307/UT/2022, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia por el que informa a la **RECURRENTE** sobre la puesta a disposición de una constancia de calificaciones, emitida por la Subdirección de Control Escolar.
5. El **doce (12) de diciembre de dos mil veintidós**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de 30 días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de 15 días hábiles adicionales.
6. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del dos mil veintidós; que, en comparación con los recibidos el año pasado, y en el mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto. Circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
7. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
8. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
9. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
10. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
    1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
    2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
    3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
    4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
11. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
12. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[1]](#footnote-1)*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
13. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.
2. El **veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes sobre la **reconducción** del recurso de revisión, de acceso a la información pública, a ejercicio de derechos ARCO. Razón de lo anterior, se les exhortó para que manifestaran, por cualquier medio, su voluntad de conciliar.
3. De las constancias que obran dentro del expediente electrónico formado en el SAIMEX, se advierte que tanto el **SUJETO OBLIGADO** como la **RECURRENTE** omitieron manifestar su voluntad de resolver la presente controversia a través de la amistosa conciliación.
4. El **doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro**, se notificó el cierre de la etapa conciliatoria y la apertura del periodo de instrucción, concediéndole a las partes un periodo de siete días hábiles para que manifestaran lo que a su interés conviniera.
5. El **diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro**, el archivo electrónico presentado por el **SUJETO OBLIGADO,** en vía de Informe Justificado, se puso a la vista de la **RECURRENTE**, concediéndole un plazo de tres (03) días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 185, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; no obstante, se hace constar que la particular no ejerció su derecho de réplica sobre los nuevos contenidos.
6. Finalmente, el **uno (01) de abril de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y ------------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafos segundo y tercero, 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero; concatenado con los artículos 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128 y 129, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios**.**

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **dos (02) de agosto de dos mil veintidós**, el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del **tres (03) al veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós**; sin contemplar en el cómputo los sábados y domingos, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Luego entonces, si el presente recurso de revisión fue interpuesto el **quince (15) de agosto de dos mil veintidós**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipiosvigente.
3. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.**

1. El artículo 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establece que, para presentar una solicitud, no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
   1. **Nombre del solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante;**
   2. Domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones;
   3. La descripción de la información solicitada;
   4. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información; y
   5. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
2. No obstante lo anterior, si bien el nombre de quien solicita la información (o su representante) es considerado como un elemento de forma de las solicitudes de información; el penúltimo párrafo del numeral 157[[2]](#footnote-2) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios aclara que las solicitudes podrán ser promovidas de forma anónima, con nombre incompleto o, inclusive, mediante el uso de un seudónimo; por lo tanto, **no es un requisito indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información**.
3. Caso contrario resultaría si la solicitud se tratarse de un ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición de **datos personales**), pues de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, las solicitudes para ejercer estos derechos deberán contener *a fortiori* lo siguiente:
   1. **El nombre del titular y su domicilio**, o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
   2. **Los documentos que acrediten la identidad del titular** y en su caso, la personalidad e identidad de su representante.
   3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud.
   4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso.
   5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
   6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.
4. Así las cosas, debemos puntualizar que los particulares no son expertos en la materia y, en ocasiones, pueden desconocer la vía para poder tener acceso a documentos en los que constan sus datos personales; por esa razón, a fin de tutelar las garantías de **eficacia, prontitud y expeditéz** que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Organismo Garante posee las atribuciones necesarias y suficientes para **reconducir** la vía de impugnación hacia un derecho distinto, igualmente tutelado por este Órgano Garante.
5. En ese sentido, de ser el caso de que el **SUJETO OBLIGADO**, o el mismo Organismo Garante, detectasen que una solicitud de acceso a información pública tiene como fin el ejercicio de derechos ARCO, se podría realizar un enderezamiento para tramitarse como el segundo, siempre y cuando se acrediten los requisitos que establece el artículo 110 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
6. Sustenta lo anterior el Criterio de Interpretación número 001/2023 emitido por el Órgano Garante Nacional, cuyo rubro y texto establece lo siguiente:

***OBLIGACIÓN DE DAR TRÁMITE A SOLICITUDES QUE IMPLIQUEN TANTO EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO, COMO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA****. “De conformidad con el principio de celeridad, cuando en una misma solicitud en la que el particular ejerza derechos ARCO, pretenda ejercer su derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados deberán atender los requerimientos en términos de la normativa aplicable a cada derecho, sin necesidad de que la persona solicitante deba presentar una nueva solicitud.”*

1. Razón de lo anterior, se determina el decretar el **enderezamiento** del presente recurso de revisión bajo el amparo del principio de **máxima publicidad** consagrado en el numeral 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 8****. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Local y la presente Ley.*

*En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Local, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, atendiendo al principio pro persona.*

*(…)“*

1. Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sentido es el siguiente:

***PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.*** *“El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento.[[3]](#footnote-3)”*

1. En otras palabras, en pro de asistir a la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; estimando la observancia de las subgarantías de **prontitud**, **eficacia** y **expeditez**, se realiza la reconducción de la vía, originalmente como un ejercicio del derecho de acceso a la información pública, al ejercicio de derechos ARCO de la **RECURRENTE**; para lo cual, sirve como criterio orientador la tesis jurisprudencial número 2008230. XXVII.3o. J/16 (10a.)., que a la letra dice:

***SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.*** *“El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos.”*

## **CUARTO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2017-2018, nivel primaria, de la Escuela con Clave de Centro de Trabajo 15PPR3296Z. El **SUJETO OBLIGADO** informó que las boletas de calificaciones sólo podían entregarse a los padres o tutores asignados al principio del ciclo escolar; o bien, que podrían consultarse a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa “*Consulta del Alumno*”.
2. La particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión con número indicado al rubro, y en el que señaló por agravios, que necesitaba acceder a la boleta de su hija a fin de poder inscribirla en su nueva escuela. Luego, en vía de informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** puso a disposición de la **RECURRENTE** la constancia de calificaciones, proveída por la Subdirección de Control Escolar, en la Unidad de Transparencia, previa acreditación de su personalidad.
3. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** colma el ejercicio de derechos ARCO de la **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 129, fracciones I y/o XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y que se transcriben a continuación:

*“****Procedencia del Recurso de Revisión***

***Artículo 129.*** *El recurso de revisión procederá en los supuestos siguientes:*

***I.*** *Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables.  
(...)*

***XII.*** *Se considere que la respuesta es desfavorable a su solicitud.*

*(...)”*

**QUINTO. Del estudio y resolución del asunto.**

**I. De los Derechos ARCO.**

1. Resulta esencial referir que la protección de datos personales es un derecho que conlleva un conjunto de elementos distintivos, consistentes en consentir, saber y tener control sobre el tratamiento de éstos; es decir, los titulares tienen la posibilidad de ejercer una serie de derechos para hacer efectiva la protección de sus datos personales, que se refieren al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, comúnmente designados, por sus siglas, como derechos **ARCO**.
2. Este derecho encuentra su sustento en los artículos 6, inciso A), fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen medularmente que **la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes**, siendo que **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos**, así como a manifestar su **oposición**, en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de los datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
3. Correlativo a lo anterior, el párrafo trigésimo cuarto del artículo 5 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,** en su fracción III, prevé el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales:

*“****Artículo 5.-*** *En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado****. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

***Para garantizar el ejercicio del derecho de*** *transparencia, acceso a la información pública y* ***protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus accione****s, en términos de las disposiciones aplicables,* ***la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso****.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

*(…)*

***III.******Toda persona****, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,* ***tendrá acceso gratuito*** *a la información pública,* ***a sus datos personales o a la rectificación de éstos****.*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. En términos generales, **los titulares de los datos personales**, a través del ejercicio de los derechos ARCO, **tienen el control sobre su información personal que se encuentra en poder de los Sujetos Obligados**.

**II. De la atención a la solicitud de acceso a datos personales.**

1. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en su artículo 97, establece que los derechos de **acceso**, rectificación, cancelación y oposición de datos personales son derechos independientes; así mismo, señala que el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro; y, que **la procedencia de estos derechos**, en su caso, **se hará efectiva una vez que el titular** o su representante legal **acrediten su identidad** o representación, respectivamente.
2. Ahora bien, por cuanto hace al **Derecho de Acceso**, éste debe entenderse como la prerrogativa del titular de los datos personales a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos en posesión de los sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los términos previstos en la Ley[[4]](#footnote-4).
3. Por cuanto hace al procedimiento de ejercicio de derechos ARCO, los titulares (o sus representantes legales) podrán solicitar a través de la Unidad de Transparencia, que se les otorgue acceso, rectifique, cancele, o que haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales y base de datos en posesión de los Sujetos Obligados[[5]](#footnote-5).
4. El ejercicio de cualquiera de estos derechos deberá ser **gratuito** y sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío en los términos previstos por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables[[6]](#footnote-6).
5. Las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO se darán por cumplidas a través de expedición de copias simples, copias certificadas, documentos en la modalidad que se hubiese solicitado, previa acreditación de la identidad y personalidad del solicitante o, en su caso, ante la notificación de improcedencia de su solicitud[[7]](#footnote-7).
6. Establecido lo anterior, de la lectura a la solicitud de acceso a datos personales **00517/SE/IP/2022**, y como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que la entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información:
   1. Boleta de calificaciones del ciclo escolar 2017-2018, nivel primaria, de la Escuela con Clave de Centro de Trabajo 15PPR3296Z.
7. En respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, e**l SUJETO OBLIGADO** entregó el oficio número 21000007010000S/01173/UT/2022, de dos (02) de agosto de dos mil veintidós, de la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido elemental se transcribe a continuación:

*“(…) se hace de su conocimiento que* ***las boletas de calificaciones*** *contienen datos personales como nombre completo, calificaciones obtenidas durante el ciclo escolar y datos de aprovechamiento, lo que hace que este documento contenga datos sensibles que* ***solo se podrán entregar*** *de forma personal* ***en la escuela correspondiente****, al padre o tutor asignado al principio de ciclo escolar,* ***o bien puede realizar una consulta en el Sistema de Información y Gestión Educativa*** *“Consulta del Alumno” en el siguiente link.*

[*https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html*](https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html)*”* (Sic)

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior se advierte que, la Titular de la Unidad de Transparencia, informó a la particular que las boletas de calificaciones sólo podían entregarse de forma personal, en la escuela correspondiente, al padre o tutor designado del alumno; o bien, que podía consultarla a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública.
2. Por su parte, la particular impugnó la respuesta mediante el recurso de revisión con número al rubro citado y, en el que señaló por agravios lo siguiente:
   1. Que ya había acudido a la escuela, sin embargo, le informaron que ya no contaban con el registro de la boleta solicitada; y
   2. Que necesitaba acceder a la boleta de su hija a fin de poder inscribirla en su nueva escuela.
3. Establecido lo anterior, se procederá a analizar la naturaleza de lo solicitado, a fin de determinar si, con su respuesta y posterior informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** colmó el derecho de acceso a datos personales ejercido por la particular o, si por el contrario, procede la entrega de documentación.

**III. De la Secretaría de Educación.**

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, establece que **toda persona tiene derecho a la educación**; de ahí nace el mandato constitucional hacia el Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios) de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
2. Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México[[8]](#footnote-8), quien durará seis años en su encargo[[9]](#footnote-9) y tendrá entre sus facultades y obligaciones, las siguientes[[10]](#footnote-10):
   1. Conducir y administrar los ramos de la administración pública del gobierno del Estado, dictando y poniendo en ejecución las políticas correspondientes mediante las acciones públicas y los procedimientos necesarios para este fin; y
   2. Crear organismos auxiliares, cuya operación quedará sujeta a la ley reglamentaria.
3. Por su parte, el diverso 78 de nuestra Constitución Local establece que para el despacho de los asuntos que la Constitución le encomienda, el Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales establezcan.
4. Del mandato constitucional anterior, nace la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, cuyo objeto es establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal[[11]](#footnote-11).
5. Así, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública, el numeral 23 de la Ley Orgánica en comento establece que auxiliarán a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, las siguientes dependencias:
   1. Secretaría General de Gobierno;
   2. Secretaría de Seguridad;
   3. Secretaría de Finanzas;
   4. Secretaría de Salud;
   5. Secretaría del Trabajo;
   6. **Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación**;
   7. Secretaría de Bienestar;
   8. Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura;
   9. Secretaría del Campo;
   10. Secretaría de Desarrollo Económico;
   11. Secretaría de Cultura y Turismo;
   12. Secretaría de la Contraloría;
   13. Secretaría a del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible;
   14. Secretaría del Agua;
   15. Secretaría de las Mujeres;
   16. Secretaría de Movilidad;
   17. Consejería Jurídica; y
   18. Oficialía Mayor.
6. Resultando de especial interés para el presente asunto la **Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación**, la cual será el órgano encargado de **fijar y ejecutar la política educativa**, deportiva, de ciencia y tecnología en la Entidad, en el ámbito de su competencia[[12]](#footnote-12).
7. De acuerdo con lo establecido por el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la **Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación** tendrá, entre sus atribuciones, las siguientes:

*“****Artículo 35.*** *La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación contará con las siguientes atribuciones:*

***I.******Formular****, en el ámbito que compete al Gobierno Estatal,* ***la política educativa****, así como la del deporte ciencia y tecnología;*

***II.******Fungir como órgano de*** *consulta, asesoría y* ***apoyo sobre la función educativa****, la ciencia y la tecnología y el deporte para coadyuvar a la adecuada instrumentación de los proyectos que en la materia realicen las dependencias y entidades y organismos auxiliares de la Administración Pública;*

***III.*** *Planear,* ***organizar****, desarrollar, vigilar y evaluar* ***los servicios educativos que dependen del Gobierno del Estado*** *o sus organismos descentralizados con apego a las legislaciones federal y estatal vigentes;*

***IV.******Coordinar*** *con el Organismo Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, planear, desarrollar,* ***dirigir****, vigilar y evaluar* ***los servicios de educación básica y normal******transferidos****, en los términos de la legislación vigente;*

***V.******Vigilar*** *en el ámbito de su competencia,* ***el cumplimiento de las políticas y planes****, así como las disposiciones jurídicas y administrativas* ***del sector educativo****, deportivo y científico y tecnológico de la Entidad;*

***VI.*** *Integrar, administrar y operar el* ***Registro de Instituciones Educativas del Estado de México****, en el ámbito de su competencia;*

***VII.******Vigilar el cumplimiento de las disposiciones*** *jurídicas, administrativas, políticas y planes* ***del sector en las instituciones educativas privadas*** *de la Entidad en todos los tipos, niveles y modalidades, en términos de la legislación vigente;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior se colige que la **Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación** tendrá la alta responsabilidad, entre otras, de formular la política educativa en la entidad; así mismo, será el órgano de consulta y apoyo sobre la función educativa; también, se encargará de organizar, dirigir y evaluar los servicios educativos que dependan del Gobierno del Estado de México; y, coordinará, en conjunto con los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, los servicios de educación básica y normal transferidos.
2. Ahora bien, para el estudio, planeación y atención de los asuntos de su competencia, el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, contempla la siguiente estructura administrativa:

*“****Artículo 4.*** *Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con las unidades administrativas básicas siguientes:*

***I.******Subsecretaría de Educación Básica****;*

***II.*** *Subsecretaría de Educación Media Superior;*

***III.*** *Subsecretaría de Educación Superior y Normal;*

***IV.*** *Subsecretaría de Administración y Finanzas;*

***V.*** *Dirección General de Educación Preescolar;*

***VI.*** *Dirección General de Educación Primaria;*

***VII.*** *Dirección General de Educación Secundaria;*

***VIII.*** *Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo;*

***IX.*** *Dirección General de Educación Media Superior;*

***X.*** *Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior;*

***XI.*** *Dirección General de Educación Superior;*

***XII.*** *Dirección General de Educación Normal;*

***XIII.*** *Coordinación de Delegaciones Administrativas;*

***XIV.*** *Dirección General de Administración;*

***XV.*** *Dirección General de Finanzas;*

***XVI.*** *Dirección General de Supervisión de Ingresos y Egresos de Instituciones Educativas;*

***XVII.*** *Dirección General de Cultura Física y Deporte;*

***XVIII.*** *Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales;*

***XIX.*** *Coordinación de Atención a Grupos Sociales;*

***XX.*** *Coordinación de Vinculación;*

***XXI.*** *Coordinación de Innovación Educativa;*

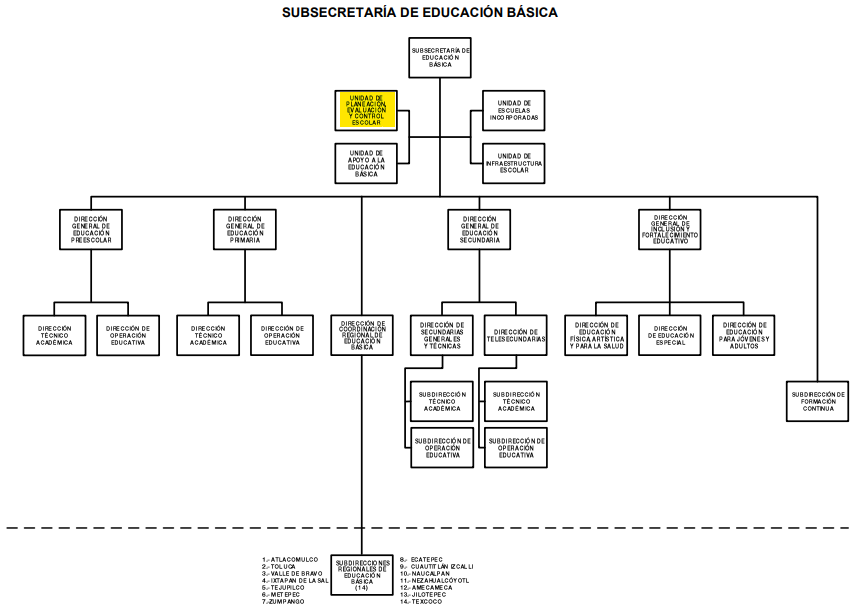
***XXII.*** *Coordinación de Política Regional;*

***XXIII.*** *Coordinación de Asuntos Jurídicos, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia;*

***XXIV.*** *Secretaría Técnica, y*

***XXV.*** *Dirección de Relaciones Laborales.”*

1. Resultando de interés la **Subsecretaría de Educación Básica**, la cual se encargará de planear, dirigir, controlar y evaluar la operatividad de los Servicios de Educación Básica en sus diferentes niveles, modalidades y vertientes en la entidad, en cumplimiento de las políticas, planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así como propiciar el desarrollo profesional del magisterio que atiende estos niveles educativos[[13]](#footnote-13).
2. Derivado de lo anterior, de acuerdo con el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, la **Subsecretaría de Educación Básica** tendrá, entre sus funciones, las siguientes:
   1. **Planear** a corto, mediano y largo plazo, **la operatividad de los Servicios de Educación Básica**, con base en las disposiciones que establecen los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, la Ley General de Educación, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México y las prioridades que en materia educativa fije el Ejecutivo Estatal, así como las que registre la demanda de los Servicios de Educación Básica en el Estado;
   2. Programar, **dirigir** y supervisar **los Servicios de Educación Básica** que se imparten en instituciones públicas e incorporadas en la entidad, así como la ejecución de programas que apoyan la Educación Básica;
   3. **Establecer y vigilar la operación del registro escolar, acreditación, promoción y certificación de estudios en los niveles de Educación Básica**, del Subsistema Educativo Estatal, en estricta observancia a las disposiciones que en la materia establecen la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de México.
3. A fin de atender sus atribuciones, de acuerdo con el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica tendrá la siguiente estructura administrativa:



1. Sobre la **Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar**, ésta tendrá por objetivo el **coordinar** la integración y seguimiento de los planes y programas de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Educación Básica; la **integración y emisión de la información estadística básica y el proceso de control escolar del Subsistema Educativo Estatal**[[14]](#footnote-14).
2. De conformidad con lo establecido por el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, la **Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar** contará con las siguientes unidades *staff*:
   1. **Subdirección de Control Escolar**;
   2. Departamento de Información y Sistemas; y
   3. Departamento de Planeación y Evaluación de Programas.
3. La **Subdirección de Control Escolar** tendrá el objetivo de cumplir y vigilar la aplicación de la normatividad vigente para el **desarrollo del proceso de control escolar en escuelas públicas** y particulares **de educación básica**, incluyendo la educación para personas jóvenes y adultas, incorporados al Sistema Educativo Nacional, así como las escuelas de Bellas Artes, en el Subsistema Educativo Estatal[[15]](#footnote-15); *ergo* tendrá entre sus funciones el **expedir** certificaciones electrónicas, duplicados de diplomas, **constancias de calificaciones, certificación parcial de estudios realizados en las escuelas de educación básica**, incluyendo la educación para personas jóvenes y adultas, y títulos en escuelas de bellas artes del Subsistema Educativo Estatal, con base en la normatividad vigente.

**IV. De la modificación de la respuesta inicial a través del informe justificado.**

1. Una vez establecido el marco legal que circunda la naturaleza de los datos personales solicitados, así como la competencia del **SUJETO OBLIGADO** para conservarlos y resguardarlos, debemos recapitular que uno de los requisitos esenciales para ejercer alguno de los derechos ARCO, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, son los **documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, la personalidad e identidad de su representante**.
2. Como ha sido referido a lo largo de la presente resolución, al haberse promovido la solicitud de ejercicio de derechos ARCO **00517/SE/IP/2022** a través del SAIMEX, la particular no obtuvo las instrucciones precisas para poder presentar la documentación que pudieran acreditar su identidad como la madre de la menor de quien se requiere su boleta de calificaciones.
3. No obstante, la omisión en comento fue resarcida por la **RECURRENTE** a través de la presentación del recurso de revisión **13323/INFOEM/IP/RR/2022**, toda vez que, como fuera referido en el apartado de *Antecedentes*, adjuntó los siguientes documentos:
   1. Copia fotostática de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de la **RECURRENTE**.
   2. Acta de nacimiento de la **RECURRENTE**.
   3. Acta de nacimiento de la hija de la **RECURRENTE**, de iniciales *P. N. L. M.*
4. Así las cosas, con ayuda de los documentos ofrecidos por la **RECURRENTE**, y en seguimiento a los principios de **calidad[[16]](#footnote-16)** y **responsabilidad[[17]](#footnote-17)** que rige la materia de protección de datos personales, el **SUJETO OBLIGADO** aprovechó la etapa procesal denominada como *periodo de instrucción o manifestaciones* para **modificar** su respuesta inicialmente proveída a la solicitud **00517/SE/IP/2022** mediante la entrega del oficio número 21000007010000S/1307/UT/2022, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido elemental se vierte a continuación:

*“(…) con la finalidad de privilegiar el acceso a la información pública,* ***esta Unidad de Transparencia*** *mediante oficio 21000007010000S/01173/UT/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, solicitó una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la boleta de calificaciones de la menor que refiere la recurrente, por lo que derivado de dicha búsqueda el Servidor Público Habilitado en* ***la Unidad de Planeación*** *(…) a través del oficio 210010000010000S/0097/2022* ***informa lo siguiente****:*

*“Las boletas se imprimen y son entregadas directamente en la escuela correspondiente, por lo que* ***el Sujeto Obligado no cuenta con copias para realizar una reposición y tendrá que realizarla directamente en la escuela donde estudia o estudió la alumna o alumno****, sin embargo,* ***esta Subdirección****, en el ámbito de sus atribuciones,* ***expide una constancia de estudios misma que hace las veces de la boleta de calificaciones*** *emitida por el plantel educativo.”*

*En esa tesitura****, se pone a disposición de la recurrente la constancia de calificaciones emitida por la Subdirección de Control Escolar por un plazo de hasta 60 días posteriores a la notificación del presente informe justificado****, en las oficinas que ocupa esta Unidad de Transparencia, (…) la cual será entregada previa acreditación de su personalidad, la identificación de la menor, así como los requisitos que señalan los artículos 8, y de ser el caso 12 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.”* (Sic)

(Énfasis añadido)

1. De la transcripción anterior, podemos rescatar los siguientes pronunciamientos:
   1. Que la **Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar** manifestó que las boletas se imprimían y entregaban a las escuelas correspondientes, por lo que la Secretaría de Educación no contaba con copias para realizar una reposición;
   2. Sin embargo, la **Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar**, en el ámbito de sus atribuciones, reconoció la facultad de poder expedir una constancia de estudios, la cual, hace las veces que una boleta de calificaciones;
   3. Que la **Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar** generó la constancia de calificaciones de la menor de iniciales *P. N. L. M.*, misma que se pondría a disposición de la **RECURRENTE**, previa acreditación de su personalidad, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación.

1. Así las cosas, al existir un pronunciamiento directo por parte del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el cual, expuso las razones por las que no cuenta con copia de boletas de calificaciones en sus archivos, es necesario señalar que este Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los Solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que la misma queda registrada en el SAIMEX.
2. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, mediante el Criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que dice:

*“****EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS NO CUENTA CON FACULTADES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS.*** *El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

1. Empero lo anterior, no debe perderse de vista que el **SUJETO OBLIGADO** informó que dentro de sus facultades se encontraba la de generar constancias de calificaciones, las cuales, **hacen las veces de una boleta de calificaciones emitida por el plantel educativo**; por ello, y con ayuda de la información proveída por la **RECURRENTE** a través de su recurso de revisión, **el SUJETO OBLIGADO generó la constancia de calificaciones de la menor de iniciales *P. N. L. M.***, misma que puso a su disposición, previa acreditación de su personalidad, en la **Unidad de Transparencia**, ubicada en la Calle Otumba, número 781, Colonia Electricistas, Toluca, Estado de México, por un plazo de hasta **60 días** posteriores a la notificación del informe justificado.
2. No obstante, toda vez que el informe justificado del **SUJETO OBLIGADO** se presentó el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós, y éste fue notificado a la **RECURRENTE** hasta el diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro, existe una alta posibilidad de que el documento en cuestión ya no forme parte del resguardo temporal de la Unidad de Transparencia.
3. Razón de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá poner nuevamente a disposición de la **RECURRENTE**, previa acreditación de su identidad, en las oficinas de la Unidad de Transparencia, la **constancia de calificaciones de la menor de iniciales *P. N. L. M.*** Para ello, deberá informar sobre los días y horarios de atención, así como el nombre del o los servidores públicos quienes se encargarán de atenderle.

**V. De la acreditación de la identidad de la RECURRENTE.**

1. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de orden público y observancia general en el territorio nacional y tendrá por objeto[[18]](#footnote-18):
   1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
   2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
2. Dentro del conglomerado de derechos reconocidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, resalta el **derecho a la intimidad**, el cual establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la **protección de sus datos personales**[[19]](#footnote-19).
3. Consecuencia de lo anterior, se considerará **violación a la intimidad** de niñas, niños o adolescentes **cualquier manejo directo de** su imagen, nombre, **datos personales o referencias que permitan su identificación** en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez[[20]](#footnote-20).
4. Correlativo a lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, en su artículo 8, establece lo siguiente:

*“****Artículo 8.******En el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes se privilegiará el interés superior de éstos****, en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las demás disposiciones legales aplicables,* ***y se adoptarán las medidas idóneas para su protección****.*

*(…)*

*El responsable podrá limitar el acceso de la o el representante a los datos personales sensibles de adolescentes, en aquellos casos que se puedan afectar sus derechos humanos siempre y cuando no contravenga el interés superior.”*

(Subrayado añadido)

1. De esta manera, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios garantiza el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su interés superior. Por ello, se prevé que existan medidas de seguridad eficaces que garanticen la protección de datos personales de menores; y, para conceder su acceso, se deberá acreditar la **personalidad legítima** de quienes pretender ejercer derechos ARCO de niñas, niños y/o adolescentes.
2. Establecido lo anterior, el artículo 120 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, reconoce como medios para acreditar la identidad como titular de datos personales, los siguientes:
   1. Identificación oficial;
   2. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o
   3. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto o el Instituto Nacional publicados por acuerdo general en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” o en el Diario Oficial de la Federación.
3. Por su parte, el diverso 106 de la Ley en comento aclara que, **en el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad** o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las **reglas de representación** dispuestas en la misma legislación.
4. Al respecto, el Código Procedimientos Civiles del Estado de México reconoce por **capacidad procesal** a la facultad de las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan capacidad legal, para actuar por sí o por medio de representante, para comparecer en juicio[[21]](#footnote-21); y, por **representación procesal**, al derecho de los interesados**, o sus representantes legítimos**, de comparecer por sí o por mandatario o procurador[[22]](#footnote-22).
5. Así las cosas, la legislación civil de la entidad reconoce que los **representantes legítimos** de niñas, niños y adolescentes serán quienes podrán ejercer **representación procesal** en el procedimiento judicial; lo anterior, nos lleva a analizar entonces los elementos que conforman la personalidad, así como los medios para acreditarla.
6. El Código Civil del Estado de México reconoce que los **derechos de la personalidad** constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas[[23]](#footnote-23); y, considera como atributos: el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio[[24]](#footnote-24).
7. En relación con el patrimonio moral o afectivo de las personas podemos enlistar, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes[[25]](#footnote-25):
   1. El honor, la dignidad, el crédito y el prestigio;
   2. El aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia;
   3. El respeto a la reproducción de la imagen y voz;
   4. **Los derivados del nombre** o del seudónimo, de la nacionalidad, de la pertenencia cultural, **de la filiación**, de su origen **y de su identidad**.
   5. El domicilio;
   6. La presencia estética;
   7. Los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes;
   8. El respeto, salvaguarda y protección de la integridad física, psicológica y patrimonial.
8. Ahora bien , el numeral 2.5 Bis del Código Civil del Estado de México establece los medios para acreditar la identidad de las personas físicas, a saber:

*“****Artículo 2.5 Bis.-*** *Se consideran como medios aceptables y válidos para acreditar la identidad de las personas físicas, los documentos públicos ya sea en original o en copia certificada, expedidos por las autoridades competentes, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:*

***I. En caso de menores de edad, el acta de nacimiento****, la carta de naturalización* ***y las credenciales expedidas por autoridades educativas que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial****;*

***II.*** *La Credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la licencia para conducir y la carta de naturalización;*

***III.*** *Las credenciales expedidas por autoridades educativas, las cédulas profesionales o de pasante y en caso de los varones, la cartilla del servicio militar nacional.*

***IV.*** *Las demás identificaciones reconocidas como oficiales. Estos documentos solo acreditan la identidad de su titular y no así la de su domicilio.”*

(Énfasis añadido)

1. De esta manera, se advierte que, en el caso de menores de edad, el acta de nacimiento resulta como el documento idóneo que permite acreditar no solo la identidad de niñas, niños o adolescentes, sino también la de sus **representantes legítimos** o, en palabras más sencillas: sus padres o tutores.
2. Mientras que para el caso de los **representantes legítimos**, en seguimiento a lo establecido por el artículo 120 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, podrán acreditar su identidad a través de **identificación oficial**.
3. No se omite mencionar en el presente asunto que, a través del oficio número 21000007010000S/1307/UT/2022, el **SUJETO OBLIGADO** informó a la **RCURRENTE** que le sería entregada la constancia de calificaciones *“previa acreditación de su personalidad* [y] *la* ***identificación de la menor****”*; sin embargo, el exigir la identificación de la menor, que se puede suponer como su credencial de la escuela, se advierte como un requisito que vulnera el ejercicio de sus derechos ARCO, toda vez que ni el **SUJETO OBLIGADO**, ni este Organismo Garante, tiene certeza de que aún cuente con este documento o, inclusive, que la institución educativa lo haya expedido.
4. Así las cosas, de ser el caso que el **SUJETO OBLIGADO** requiera mayores datos que acrediten la identidad de la menor previo a entregar la constancia de calificaciones requerida, podrá solicitar aquéllos que sean de fácil generación y acceso como, de manera enunciativa más no limitativa, la Clave Única de Registro de Población.

**SEXTO. Decisión.**

1. Luego de analizar la naturaleza de lo solicitado, así como las constancias que integran el expediente digital, se estableció que la **RECURRENTE** no pretendía ejercer su derecho de acceso a la información pública, sino de derechos ARCO, por lo que se determinó procedente la reconducción de vía. Después, a través del análisis del marco legal de lo solicitado, se acreditó que el **SUJETO OBLIGADO** no tenía facultades para poseer copias de boletas de calificaciones; empero, podía generar constancias, las cuales tenían la misma validez que las primeras.
2. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **13323/INFOEM/IP/RR/2022**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 137 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales número **00517/SE/IP/2022**.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **13323/INFOEM/IP/RR/2022** en términos del **Considerando** **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por la **Secretaría de Educación** a la solicitud **00517/SE/IP/2022** y se **ORDENA** conceder el acceso, en la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, **previa acreditación de la identidad**, a los siguientes datos personales:

1. **Constancia de calificaciones de la menor de iniciales *P. N. L. M.*, del ciclo escolar 2017-2018.**

A fin de atender lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá informar, vía SAIMEX, sobre la dirección de la Unidad de Transparencia, así como los días y horarios de atención, y el nombre del personal acreditado para atenderla.

**TERCERO.** Notifíquese a la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 137, segundo párrafo, 140 y 141 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro **del plazo de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 11, 145 y el Título Décimo Tercero de la Ley de Protección de Datos, así como los artículos 198, 200, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por aplicación supletoria.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la entidad, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO,** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a la **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de la **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRES (03) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-1)
2. “**Artículo 157.**

   (…)

   Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.

   (…)” [↑](#footnote-ref-2)
3. 2007561. 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Pág. 613. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 98, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 106, Ídem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 107, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 118, Ídem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 65, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 67, Ídem. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 77, Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 1, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 34, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-12)
13. Registro 21001000000000L. Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. [↑](#footnote-ref-13)
14. Registro 21001000010000S, Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. [↑](#footnote-ref-14)
15. Registro 21001000010100S. Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. [↑](#footnote-ref-15)
16. “**Principio de Calidad**

    **Artículo 16.** Los responsables adoptarán las medidas para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, para no alterar su veracidad.

    (…)” [↑](#footnote-ref-16)
17. “**Principio de Responsabilidad**

    **Artículo 27.** El responsable cumplirá con los principios de protección de datos establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior cuando los datos fueren tratados por un encargado o tercero a solicitud del sujeto obligado.

    (…)” [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 1, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 76, Ídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 77, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 1.78, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 1.79, Ídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Artículo 2.4, Código Civil del Estado de México [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 2.3, Ídem. [↑](#footnote-ref-24)
25. Artículo 2.5, Ídem. [↑](#footnote-ref-25)